

Santiago, catorce de abril de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 483 A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada, en relación con la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que rechazó el recurso de nulidad deducido por su parte, en contra de la sentencia de primer grado, que rechazó la denuncia de tutela laboral, declaró la existencia de una relación laboral entre las actoras y la demandada por el tiempo que indica, declaró el despido carente de causal y nulo, condenando a pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo, la de años de servicio, el recargo legal y las remuneraciones por despido nulo, rechazando en lo demás la demanda.

Segundo: Que el legislador laboral ha señalado que es susceptible del recurso de unificación de jurisprudencia la resolución que falle el arbitrio de nulidad, a cuyo efecto indica que procede cuando *«respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia»*, constituyendo requisitos de admisibilidad, que deben ser controlados por esta Corte, su oportunidad, la existencia de fundamento y una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones a que se ha hecho referencia. La norma exige, asimismo, acompañar copia del o de los fallos que se invocan como fundamento -artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo-.

Tercero: Que, como primera materia de derecho a unificar, la recurrente plantea la determinación de la *«validez de los documentos privados que se utilizan como prueba en juicio»*.

Cuarto: Que, enfocándonos en este primer acápite del recurso, como se advierte, aquella no resulta ser la materia de derecho objeto del juicio, el que versó sobre reconocimiento de la relación laboral, tutela laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones. Asimismo, considerada aisladamente, tampoco resulta una materia de derecho susceptible de ser conocida por esta Corte, toda vez que trata de un aspecto de naturaleza procesal y abstracto, no apto de ser objeto del presente recurso.

Quinto: Que, en estas condiciones, sólo cabe declarar la inadmisibilidad del recurso deducido en lo referido a este acápite.



Sexto: Que, como segunda materia de derecho, se propone la determinación de la *«interpretación y aplicación de la sanción contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, cuando la parte demandada es un órgano de la administración del Estado, en el sentido de si opera o no una presunción de legalidad en su favor, que lo imposibilitaría de integrar las cotizaciones previsionales»*.

Séptimo: Que, al respecto es necesario establecer que la recurrente presentó recurso de nulidad fundado en las causales del artículo 478 letra b) y e) del Código del Trabajo de manera conjunta. Luego, y en subsidio de las anteriores, la del artículo 477 en relación con los artículos 1698, 1701, 2º; 1702 y 1703 del Código Civil, y finalmente, en subsidio de las anteriores, nuevamente la causal del artículo 477, pero esta vez en relación con el artículo 162 del cuerpo legal citado.

La sentencia recurrida, para desestimar las primeras causales conjuntas del recurso de nulidad estableció *«...que, en este sentido, no se advierte el yerro alegado, ya que los documentos que se pretenden objetar fueron ponderados debidamente y analizados en conformidad a la totalidad de la prueba rendida en juicio.*

Que conforme la misma recurrente reconoce, no objetó oportunamente los documentos que reclama, alegando su falsedad o falta de integridad, por lo que no resulta posible pretender por la vía de la nulidad, enmendar dicha omisión».

Agrega el fallo que *«sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que el artículo 432, del Código del Trabajo hace aplicable en forma supletoria las normas del Código de Procedimiento Civil. Tras la reforma introducida por la ley 20.886, al artículo 346 del referido cuerpo normativo, se agrega al final de la norma, lo siguiente: “En el caso de documentos electrónicos privados, para los efectos del artículo 346, N°3, se entenderá que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria en la audiencia de percepción. En el caso que los documentos electrónicos acompañados puedan ser percibidos directamente en la carpeta electrónica, el tribunal podrá omitir la citación a audiencia de percepción, debiéndose entender que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria desde que se notifica la resolución que los tiene por acompañados bajo el apercibimiento correspondiente.” Lo anterior refuerza la idea entonces, de que la alegación que pretende la recurrente resulta del todo extemporánea»*.

Octavo: Que, hecho el análisis que imponen las normas mencionadas en el considerando segundo, aparece que el recurso, en relación a la segunda materia



formulada no podrá prosperar en los términos planteados, ya que en el fallo que lo motiva, como se advierte, no existe pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia, toda vez que no existe un desarrollo de la causal referida a la aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, sin que exista un razonamiento respecto del fondo de la materia propuesta.

Noveno: Que, en estas condiciones, y como sucedió con la primera materia de derecho planteada, sólo cabe declarar la inadmisibilidad del recurso deducido, teniendo particularmente en cuenta para así resolverlo, el carácter especialísimo y excepcional que le ha sido conferido por los artículos 483 y 483-A del Estatuto Laboral.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de siete de diciembre del dos mil veintiuno de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Regístrese y devuélvase.

Nº 1.071-22.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz L. No firma el Ministro señor Simpertigue, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso. Santiago, catorce de abril de dos mil veintidós.



En Santiago, a catorce de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

